



Proceso	Acción Popular
Demandante	Bernardo Abel Hoyos Martínez
Demandado	Réditos Empresariales S.A.
Radicado	05001 31 03 008 2018 00017 01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado 8º Civil del Circuito de Medellín
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 126
Tema	Declara inadmisibile apelación de auto
Subtema	Recursos que proceden contra los autos proferidos en el trámite de la acción popular. Sentencia de constitucionalidad.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés

Abordado el estudio de la acción popular instaurada por **BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ** en contra de **RÉDITOS EMPRESARIALES S.A.** con miras a proferir la correspondiente decisión, se advierte que el Tribunal carece de competencia para conocer en segunda instancia porque no cumple con todos los requisitos para la concesión del recurso de apelación y su admisión, como se pasa a indicar.

1. EL actor popular interpuso recurso de apelación contra el auto del 10 de marzo de este año, mediante el cual el juzgado

de primer grado declaró la nulidad procesal por agotamiento de jurisdicción, *"por cuanto la misma, ya fue fallada por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín de esta localidad, radicado 05001310301720180023700"* y, en consecuencia, rechazó la demanda.

2. Los arts. 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, norma que regula el trámite de la Acción Popular, determinan de forma expresa y especial los recursos procedentes contra las providencias que en este se dicten; el primero de ellos establece que contra los autos procede el recurso de reposición el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). El segundo, señala que procederá el recurso de apelación contra la sentencia que se dicte en primera instancia en la forma y oportunidad señalada en la en la norma referida.

Con soporte las citadas normas, se colige que para las acciones populares, el recurso de apelación solo se contempla para las sentencias de primera instancia y, por mandato del art. 26 ibídem, para el auto que decreta medidas cautelares previas. En este orden de ideas, el recurso procedente contra los demás autos es el de reposición.

3. El tema de la impugnación restrictiva en contra de providencias dictadas al interior del trámite de una acción popular, fue estudiado con detenimiento por la Corte Constitucional en Sentencia C-377-02, mediante la cual declaró exequible el artículo 36 de la referida Ley 472 de 1998, que establece que contra los autos proferidos en el trámite sólo procede el recurso de reposición, concluyendo

que la restricción de la apelabilidad no implica el sacrificio de los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia, puesto que el tema podía ser estudiado mediante reposición; además, que en materia de apelación la Constitución Política consagra el principio de libertad de configuración del legislador; al efecto, literalmente consideró:

"El artículo 36 de la Ley 472 de 1998, que se demanda, dispone que contra los autos dictados durante el trámite de la acción popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil".

(...)

"Para resolver los cargos planteados por el actor y con el fin de establecer si la facultad de configuración legislativa en este caso se ejerció de acuerdo a las disposiciones constitucionales y sin violar los derechos y garantías fundamentales, considera la Corte pertinente referirse en primer término a los antecedentes legislativos de la norma acusada".

"El iter legislativo pone de presente que la propuesta legislativa inicialmente se orientó hacia la consagración del recurso de reposición contra todos los autos que dicte el juez o magistrado, previendo la posibilidad de interponer el de apelación contra las providencias que señala el Código de Procedimiento Civil y además contra el auto que decreta medidas previas, el que niegue la práctica de alguna prueba y contra la sentencia de primera instancia.¹ En estos términos la

¹ Gaceta del Congreso del jueves 27 de julio de 1995. Página 10

iniciativa se conservó durante el primer y segundo debate en la Cámara de Representantes.² En el Senado de la República se dio un giro fundamental, pues para agilizar el proceso se propuso que las providencias que se dicten en el trámite de la acción popular, con excepción de la sentencia, carecerían de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas contra el cual se establecía el recurso de reposición. El recurso de apelación se reservaba para la sentencia de primera instancia³”.

“Posteriormente, en la ponencia para segundo debate en el Senado se decidió acoger las recomendaciones “en orden a garantizar el derecho de defensa y permitir el recurso de reposición contra todos los autos de trámite que se dicten el proceso”⁴ y así fue como finalmente el texto del artículo 36 de la Ley 472 de 1998 estableció el recurso de reposición contra los autos dictados durante el trámite de las acciones populares”.

“Hecha esta precisión, para la Corte es claro que la medida contenida en la norma bajo revisión no se opone a la Carta Política pues consulta la naturaleza expedita de las acciones populares, en la medida en que al imprimirle celeridad a su trámite judicial propende por la efectividad de los derechos e intereses colectivos amparados por dichas acciones, que según se analizó se caracterizan por demandar del Estado una labor anticipada de protección”.

² Gaceta del Congreso No. 493 de 1995 página 9. Y gaceta del 28 de mayo de 1996 página 12

³ Gaceta del Congreso No.498 de 1996 página 11 y Gaceta No. 11 de 1997 página 43

⁴ Gaceta del Congreso No. 167 de 1997 página 2

"Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. 34), para lo cual el juez debe impulsar oficiosamente la actuación so pena de ser sancionado disciplinariamente, y sin que ello pueda comportar el desconocimiento de las reglas fundamentales del proceso pues en las acciones populares el juez tiene la obligación de velar "por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes" (art. 5°)".

"En criterio de esta Corporación la determinación que se analiza tampoco implica sacrificio alguno del derecho de defensa y del derecho de acceder a la administración de justicia (CP arts. 29 y 229), puesto que con la consagración del recurso de reposición el accionante puede ejercer libremente su derecho de controvertir las decisiones adoptadas por el juez durante el trámite de las acciones populares a fin de que éste funcionario revise la validez de su propia determinación revocándola o reformándola".

"Igualmente, y como bien lo aprecia el Procurador General en su concepto, la norma demandada no desconoce los artículos 88 y 89 de la Carta, pues del mandato de estas disposiciones no se desprende que el Constituyente le haya impuesto al legislador la obligación de consagrar el recurso de apelación contra los autos dictados durante el trámite de la acción popular. Por el contrario, la libertad de configuración en esta materia se desprende de estas normas superiores cuando en ellas se dispone expresamente que la ley regulará las

acciones populares y establecerá los recursos y procedimientos necesarios para su efectividad”.

“En suma, entendida la norma en el sentido de que se aplica a todos los autos dictados durante el trámite de las acciones populares, no se desconoce la Carta Política pues el legislador en ejercicio de su libertad de configuración puede señalar en qué casos es o no es procedente el recurso de apelación, decisión que, según se advirtió, no conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la justicia y además la igualdad, porque con tal determinación se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como es la de obtener la pronta y efectiva protección de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones populares, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente”.

4. Con base en los arts. 36 y 37 que vienen de citarse y en la sentencia de Constitucionalidad que en lo pertinente se transcribió, se concluye sin vacilación que el recurso de apelación está consagrado exclusivamente para la sentencia y el auto que decreta medidas cautelares previas y, por ser norma especial, no se puede acudir a las disposiciones contenidas en el Código General del Proceso; lo que permite colegir que en este caso no es procedente el recurso de apelación, lo que impone su inadmisión y la devolución de la actuación al juzgado de origen, con la advertencia que si fuere el caso, debe dar aplicación al parágrafo del art. 318 del C. General del Proceso.

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

RESUELVE:

PRIMERO. Por lo dicho en la parte motiva, se declara **INADMISIBLE** el recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró la nulidad procesal por agotamiento de jurisdicción y, en consecuencia, rechazó la demanda, en la acción popular promovida por **BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ** en contra de **RÉDITOS EMPRESARIALES S.A.**

SEGUNDO. Remítase el expediente al Juzgado de conocimiento, con la advertencia que debe tener en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del art. 318 del C. General del Proceso.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
Magistrado